

PROYECTO NORMATIVO – RECOPIACION DE NORMAS DE REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO

El pasado 10 de diciembre el Banco Central del Uruguay emitió la Circular No 2.311 que trae importantes modificaciones para todos los actores del sistema financiero, en aras de acompañar las disposiciones de la Ley 19.574 (Ley integral de Prevención de LA y FT).



Dra. Silvana Porto
sporto@testa.com.uy

I. ALCANCE

La Circular introduce modificaciones a las normas relativas a políticas y procedimientos de debida diligencia del cliente, reporte de operaciones sospechosas, conservación de la información y documentación y régimen informativo al BCU.

Cobrando especial importancia los requerimientos de información y documentación para clientes, a raíz de la incorporación de la defraudación tributaria como delito precedente de lavado de activos (Ley No. 19.574).

En lo que refiere a sujetos obligados, las modificaciones aplican a todos los integrantes del sistema financiero. No obstante, a continuación se destacan las principales modificaciones que alcanzan a las **Casas de Cambio, Empresas de Servicios Financieros y Empresas de transferencias de fondos.**

II. PRINCIPALES CAMBIOS

A continuación, presentamos los principales cambios e incorporaciones que introduce el proyecto normativo antes mencionado.

- ➔ **Art. 291 COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCION:** Se incorpora la obligación de documentar las evaluaciones de riesgo de LA y FT realizadas por cada Institución, así como de mantenerlas actualizadas, y a disposición.

- ➔ **Art. 293 POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA:** Se extiende la obligación de aplicar los procedimientos de debida diligencia, no solo a los nuevos clientes, sino también a los existentes y a los beneficiarios finales.

TESTA NEWSLETTER

Se dispone, además, que no se podrán mantener relaciones de negocios ni realizar transacciones, con aquellos clientes a los cuales no se puedan aplicar los procedimientos de debida diligencia, e incluso evaluar la pertinencia de realizar un Reporte de Operación Inusual o Sospechosa.

Asimismo, se establece que las políticas y procedimientos de debida diligencia definidos deberán considerar la categoría de riesgo de los clientes, así como aquellas situaciones que requieran una debida diligencia intensificada.

La norma incorpora una medida de excepción, habilitando a las instituciones, a no completar la debida diligencia, cuando adviertan que, de hacerlo, se estaría alertando al cliente, debiendo -en ese caso- reportar la situación a la UIAF en forma inmediata.

➔ **Art. 294 IDENTIFICACION DE CLIENTES:** Como cambio significativo, se incorpora el artículo 294.1, donde se disponen los PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION DE LA IDENTIDAD DE CLIENTES.

Este artículo establece, que cada institución deberá definir los procedimientos que estime eficaces para verificar la identidad de sus clientes, previo a establecer una relación definitiva con ellos, tomando en cuenta la evaluación de riesgos realizada oportunamente.

No obstante, las Instituciones deberán contemplar en sus procedimientos el contacto personal (presencia física) en los siguientes casos:

Categorías de Clientes	Monto ¹	Verificación de identidad del Cliente
a) <u>Cientes que realizan una actividad económica</u> (personas físicas y jurídicas que realicen actividades comerciales, industriales, agrícolas, financieras, profesionales, etc.)	Perfil de Actividad anual superior a USD 1.500.000 o Transacciones acumuladas en año calendario superiores a USD 1.500.000	Contacto personal con el titular, representante o apoderado, realizado por la Institución o terceros (art. 304 Tercerización de la DDC).
	Perfil de Actividad superior a USD 120.000 o Transacciones acumuladas en año calendario superiores a USD 120.000.	Ídem anterior u <u>otra entidad financiera local o del exterior</u> inscrita ante el organismo de contralor de su país para realizar actividades financieras o <u>escribano</u> o quien cumpla esta actividad en el exterior. Se debe obtener la correspondiente certificación que dicho contacto fue

¹ A efectos de determinar los umbrales establecidos, se considerará el volumen acumulado excluyendo aquellas relacionadas a otra operación, tal como una compraventa de moneda seguida de una transferencia.

		realizado.
<p>b) <u>Cientes que no realizan una actividad económica</u> (personas físicas y jurídicas no comprendidas en a) + sociedades que se utilicen como vehículo de inversión + sociedades cuya principal o única función es la de tener o administrar la propiedad de otras sociedades o compañías, fideicomisos, etc.).</p>	<p>Perfil de Actividad superior a USD 500.000 en caso de NO RESIDENTES o USD 1.000.000 en caso de RESIDENTES</p> <p>o</p> <p>Transacciones acumuladas en año calendario superiores a USD 500.000 en caso de NO RESIDENTES o USD 1.000.000 en caso de RESIDENTES</p>	<p>Contacto personal con alguno de los beneficiarios finales, realizado por la Institución o terceros (art. 304).</p> <p>Debe constar en la copia del documento de identidad utilizado como medio de verificación que se mantuvo dicho contacto.</p>
	<p>Perfil de Actividad superior a USD 120.000</p> <p>o</p> <p>Transacciones acumuladas en año calendario superiores a USD 120.000</p>	<p>Ídem anterior u <u>otra entidad financiera local o del exterior</u> inscrita ante el organismo de contralor de su país para realizar actividades financieras</p> <p>o</p> <p><u>escribano</u> o quien cumpla esta actividad en el exterior.</p> <p>Se debe obtener la correspondiente certificación que dicho contacto fue realizado.</p>

Asimismo, en todos los casos, cuando se trate de Personas Físicas Residentes, se admite la posibilidad que la verificación de identidad mediante contacto personal, sea realizada por un **Prestador de Servicios de Confianza** de acuerdo a las instrucciones que se impartirán.

La Circular incluye una disposición transitoria en virtud de la cual las Instituciones deberán adecuar la verificación de la identidad de los clientes a lo establecido en el presente artículo, cuando a la fecha de entrada en vigencia de la resolución, se cumplan las siguientes condiciones:

- 1) Clientes RESIDENTES: Antigüedad menor a 3 años y transacciones mayores a USD 1.500.000.
- 2) Clientes NO RESIDENTES: Antigüedad menor a 3 años y transacciones mayores a USD 1.000.000.

Para esto dispondrán de un plazo de 12 meses desde la fecha de adecuación de sus políticas.



Art. 295 IDENTIFICACION Y VERIFICACION DE LA IDENTIDAD DEL BENEFICIARIO FINAL: Otra modificación relevante que introduce el proyecto normativo, es el artículo referente al Beneficiario Final.

El mismo establece la obligación de **identificar y verificar la identidad** de los mismos. La verificación se deberá realizar de acuerdo a lo establecido en el artículo 294.1 comentado anteriormente.

Se exceptúa de la obligación de identificar al beneficiario final, cuando se trate de clientes cuyos títulos de participación patrimonial coticen en bolsas de valores nacionales o internacionales de reconocido prestigio, o sean propiedad (directa o indirectamente) de sociedades cuyos títulos de participación cumplan con el requisito antes mencionado, siempre que dichos títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados. Dicha excepción aplica únicamente respecto de los títulos que cotizan en bolsa.

Además, se introducen cambios en la definición de beneficiario final, a efectos de adecuarla a la establecida en las leyes de transparencia fiscal y en la ley integral contra el Lavado de Activos. En tal sentido, el proyecto establece:

*“Se entenderá por beneficiario final a las personas físicas que, directa o indirectamente, **posean como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital** o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica.*

Asimismo, se considerará beneficiario final a las personas físicas que aportan los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación.

Se entenderá como control final el ejercido directa o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control.

En el caso de los fideicomisos, la obligación establecida en el primer inciso alcanzará a las personas físicas que cumplan con alguna de las condiciones dispuestas en los incisos tercero a quinto en relación al fideicomitente, fiduciario y beneficiario.

Adicionalmente cuando se trate de personas que en forma habitual manejen fondos de terceros, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 302”.



Art. 297 INFORMACION MINIMA: Se agrega como requisito mínimo para los Clientes Habituales - Personas físicas, el *número de inscripción en el Registro Único Tributario o en el organismo tributario correspondiente*, y en caso que el cliente esté actuando en nombre de un tercero, se exige identificar al **Beneficiario Final** con todos los datos requeridos para un Cliente Habitual Persona Física.

Asimismo, en lo que refiere al estado civil, se incluye el dato del concubino, en caso que se trate de **unión concubinaria reconocida judicialmente**.

Respecto a los Clientes Habituales - Personas jurídicas, se incluye como requisito identificatorio la constancia de inscripción en el *Registro de beneficiarios finales (Ley No. 19.484 del 5 de enero de 2017)*, y se requiere de los **beneficiarios finales** de la transacción, todos los datos requeridos para un Cliente Habitual Persona Física.

El presente artículo dispone, asimismo, que se deberán obtener la totalidad de los datos identificatorios establecidos para un Cliente Habitual Persona Física respecto de los **apoderados y autorizados a operar** en nombre del cliente frente a la institución, y las **personas físicas que actúen en representación del cliente Persona Jurídica**, con excepción del dato profesión, oficio o actividad principal, y del volumen de ingresos, siempre y cuando no constituyan una fuente de los ingresos de los fondos manejados por el cliente.

Respecto a los Clientes Ocasionales se modifica su definición, en especial en lo referido al umbral, el cual se reduce de 305.000 UI a **USD 15.000**, y se elimina el horizonte temporal de un año. De acuerdo a las nuevas disposiciones, podrán recibir el tratamiento de clientes ocasionales *“aquellos clientes que realicen transacciones de carácter no permanente por un monto, individual o acumulado, inferior a U\$S 15.000 (dólares estadounidenses quince mil)”*.

Se incorpora una disposición transitoria que establece los plazos para la adecuación de los clientes existentes a lo establecido en el artículo de referencia:

Tipo de cliente	Plazo
Clientes de mayor riesgo	1 año
Clientes que operen por montos significativos	2 años
Clientes de riesgo medio	2 años
Clientes de menor riesgo	6 años

➔ **Art. 297.1 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION SOBRE CLIENTES:** Se incorpora la obligación de establecer procedimientos de actualización de la información sobre los clientes en función del riesgo, contemplando los siguientes plazos máximos:

Clientes de mayor riesgo	1 año
Clientes que operen por montos significativos	2 años
Clientes de riesgo medio	3 años
Clientes de menor riesgo	Actualización aperiódica cuando en el monitoreo se detecten patrones inusuales o sospechosos

Asimismo, se establece, como disposición transitoria, plazos para la actualización de la información de los clientes existentes, de acuerdo con el cuadro que sigue:

Tipo de cliente	Plazo
Clientes de mayor riesgo	1 año
Clientes que opere por montos significativos	2 años
Clientes de riesgo medio	2 años

→ **Art. 297.2 CONSERVACION DE LA INFORMACIÓN:** Se introduce un cambio muy relevante en cuanto a los plazos de conservación de documentos. El artículo establece la obligación de conservar los registros de todas las operaciones realizadas con sus clientes o para sus clientes, así como toda la información obtenida en el proceso de debida diligencia, por un plazo mínimo de 5 (cinco) años después de terminada la relación comercial.

→ **Art. 299 PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA:** Este artículo introduce cambios muy significativos a los procedimientos de debida diligencia, en especial en lo referido a la solicitud de documentación de respaldo.

En primer lugar, se establece la obligación de definir y aplicar procedimientos de debida diligencia intensificada para las categorías de clientes, relaciones comerciales u operaciones consideradas de mayor riesgo, de acuerdo con lo que surja de la evaluación de riesgo realizada por la institución.

Asimismo, se presenta una lista taxativa de clientes y transacciones que deberán ser consideradas de mayor riesgo:

- a) *“las relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no cumplen con los estándares internacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.*
- b) *las transacciones de aquellas personas que se vinculen con la entidad a través de operativas en las que no sea habitual el contacto personal como en el caso de clientes que realizan operaciones a través de modalidades operativas que, utilizando tecnologías nuevas o en desarrollo, pueda favorecer el anonimato de los clientes.*
- c) *las personas políticamente expuestas, así como sus familiares y asociados cercanos.*
- d) *todas aquellas operaciones que se realizan en circunstancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad.”*

En segundo lugar, se fijan los requisitos que deberán contemplar los procedimientos de debida diligencia intensificada:

- I. la aprobación de los principales niveles jerárquicos de la institución,

- II. la elaboración de un informe circunstanciado en el que se explicitarán todos los elementos que hayan sido considerados para elaborar su perfil de actividad, y el que deberá estar adecuadamente respaldado por documentación que permita establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de los fondos manejados por el cliente. A estos efectos, se detalla a texto expreso que se deberá contar con:
- a) ***copias de las declaraciones juradas o documentación equivalente presentadas ante la administración tributaria correspondiente, y***
 - b) *estados contables con informe de Contador Público, estados de responsabilidad, actas de distribución de utilidades, contratos de compraventa u otra documentación alternativa.*

En cuanto a la documentación de respaldo, se prevé un régimen especial para los PEP's, sus familiares y asociados cercanos, cuyo perfil de actividad anual, alcance importes menores a USD 120.000² o realicen transacciones por hasta dicho monto en el transcurso de un año calendario. En esos casos, sólo se requerirá la presentación de documentación que permita establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de los fondos manejados por el cliente. Se advierte entonces que, para estos clientes, no se dispone la presentación de copia de la declaración jurada fiscal.

- III. el aumento en la frecuencia de la actualización de la información del cliente (de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297.1).
- IV. la realización de un monitoreo más intenso de la relación comercial.
- V. incrementar la cantidad y la duración de los controles aplicados.

Vale destacar, que para aquellos clientes que operen por montos significativos será de aplicación lo establecido en los numerales II y III.

Se advierte que, para los **clientes de riesgo alto y que operen por montos significativos**, la norma proyectada establece el requisito de contar con **copia de las declaraciones juradas** o documentación equivalente **presentadas ante la administración tributaria** (como prueba de regularidad fiscal) más la documentación respaldante del origen de fondos.

Este artículo, incorpora modificaciones a los elementos que se entienden relevantes para que cada Institución defina su monto significativo:

- i. *“el mantenimiento de saldos pasivos o fondos bajo manejo superiores a un importe determinado;*
- ii. *cliente habitual que ingrese fondos extraordinarios a su cuenta bancaria o tramite transacciones por importes superiores a un valor mínimo*

² A efectos de determinar dicho umbral, se considerará el volumen acumulado excluyendo aquellas relacionadas a otra operación, tal como una compraventa de moneda seguida de una transferencia.

establecido para un período determinado, **independientemente del perfil de actividad que se le hubiera asignado;**

- iii. *cliente ocasional que propone realizar una transacción que supera un importe establecido.*”

Asimismo, se establece, como disposición transitoria, plazos para la cumplir con los requerimientos del artículo, de acuerdo con el cuadro que sigue:

Tipo de cliente	Plazo
Clientes de mayor riesgo	1 año
Clientes que opere por montos significativos	2 años

- **Art. 300 TRANSACCIONES CON PAÍSES O TERRITORIOS QUE NO APLICAN LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL:** Se actualizaron los grupos regionales y se definió con mayor claridad el alcance del análisis que debe realizar cada institución.

- **Art. 301 PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS:** Se modificó la definición, ampliando el horizonte temporal para que una persona sea considerada PEP (antes 2 años ahora **5 años**), y se amplió el elenco de personas comprendidas.

Asimismo, se incorporó la obligación de definir procedimientos para determinar cuando un cliente y/o **beneficiario final** reviste tal calidad.

- **Art. 303 INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRESPONSALES:** Respecto a este artículo, los principales cambios introducidos refieren a:
- 1) la obtención de información, donde se establezca si la institución financiera del exterior ha sido objeto o no de una investigación sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo o de una acción regulatoria.
 - 2) la realización de una evaluación de las políticas y procedimientos en materia de LA y FT, y de los controles implementados por la institución financiera del exterior.
 - 3) entender y documentar las responsabilidades de cada entidad.
 - 4) la obtención de la aprobación de los principales niveles jerárquicos de la institución al establecer este tipo de relaciones.

- **Art. 304 SERVICIOS PROVISTOS POR TERCEROS PARA PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA:** Se incorpora a este artículo las condiciones que deberán cumplirse para la tercerización de los procedimientos de debida diligencia:
- 1) *“Los terceros estarán obligados a aplicar los procedimientos de debida diligencia de clientes establecidos por la institución.*

- 2) *La institución deberá obtener y conservar la información y documentación relativa a la identificación y conocimiento del cliente en todos los casos, tal como si los procedimientos de debida diligencia hubieran sido completados directamente por ésta.*
- 3) *La institución mantendrá en todo momento la responsabilidad final por la adecuada identificación y conocimiento de los mismos, debiendo verificar la adecuada aplicación de sus procedimientos a los clientes cuya debida diligencia sea realizada por un tercero”.*

Asimismo, se establece que la debida diligencia continua no puede ser tercerizada. En tal sentido, la norma proyectada señala: *“No podrán utilizarse los servicios de terceros para la realización del monitoreo de cuentas y transacciones a los efectos de detectar patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes.”*

➔ **Art. 305.1 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y CUSTODIA DE COFRES DE SEGURIDAD:** Se incorpora este artículo estableciendo los lineamientos que deberán seguir las Instituciones que ofrezcan este servicio.

➔ **Art. 313 DEBER DE INFORMAR OPERACIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES:** Se amplió el alcance de este artículo, señalando que *“la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que –aun involucrando activos de origen lícito– se sospeche que están vinculadas a personas físicas o jurídicas comprendidas en dicho delito o destinados a financiar cualquier actividad terrorista”.*

Asimismo, se establece que *“...la información deberá comunicarse en forma inmediata a ser calificadas como tales y aun cuando las operaciones no hayan sido efectivamente concretadas por la institución ya sea porque el cliente desistió de realizarla o porque la institución resolvió no dar curso a la misma”.*

➔ **Art. 605.1 INFORME DE AUDITORES EXTERNOS – CASAS DE CAMBIO:** Se incorpora la obligación para las Casas de Cambio de presentar un informe anual de evaluación del sistema integral de prevención, donde se emita opinión respecto a la idoneidad y el funcionamiento del sistema adoptado por la casa de cambio para prevenirse de ser utilizada para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, indicando sus deficiencias u omisiones materialmente significativas, las recomendaciones impartidas para superarlas y las medidas correctivas adoptadas por la institución.

Este informe deberá ser entregado a la Superintendencia de Servicios Financieros dentro de los 3 meses contados desde el cierre del ejercicio.

El primer informe anual se exigirá para el [ejercicio finalizado al 30 de junio de 2019.](#)

- ➔ **Art. 613.3 INFORMACIÓN SOBRE TRANSACCIONES Y SERVICIOS:** Se incorpora este artículo, el cual establece la obligación de las Empresas de Servicios Financieros y Casas de Cambio de proporcionar información anual sobre transacciones y servicios, agrupados según factores de riesgo para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La referida información se deberá presentar a la UIAF de acuerdo con las instrucciones que se impartirán, dentro de los 30 días siguientes al cierre del ejercicio al que está referida.

- ➔ **Art. 613.4 REPORTE DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COFRES DE SEGURIDAD:** Se incorpora este artículo, el cual establece la obligación de las empresas de servicios financieros y casas de cambio de informar a la Superintendencia de Servicios Financieros las altas y bajas de servicios de arrendamiento de cofres de seguridad, incluyendo datos de los titulares, apoderados y autorizados para operar en nombre del cliente frente a la institución.

La información deberá ser proporcionada dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se realiza el alta o baja del servicio o de la modificación de las personas vinculadas con éste, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán.

Vale destacar que la Circular incluye una disposición transitoria. La misma establece que las instituciones disponen de un plazo de **90 días** para adecuar sus políticas y procedimientos en los términos mencionados.

Quedamos a vuestras órdenes por cualquier consulta o aclaración, así como para asistirlos en la implementación de los cambios aprobados.
